ministrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Subsecretario.

17633

ORDEN número 111/10061/80, de 23 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictado con fecha 11 de junio de 1979 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eduardo Rodríguez González.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como demandante, don Eduardo Rodríguez González, quien postula por sí mismo, y de otra como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra sentencia de 13 de abril de 1978 de la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Madrid, se ha dictado sentencia con fecha 11 de junio de 1979 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimando el recurso de revisión de don Eduardo Rodríguez González, contra sentencia de trece de abril de mil novecientos setenta y ocho de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso sesenta y nueve/mil novecientos setenta y cinco, interpuesto contra resolución de la Jefatura del Departamento de Personal del Ministerio de Marina de veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, sobre reconocimiento de antigüedad, declarando conforme a derecho dicha sentencia, con imposición de costas al recurrente y pérdida de depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

La sentencia que se revisa es del tenor siguiente:

Fallamos: «Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eduardo Rodríguez González, contra acuerdo de la Dirección de Enseñanza Naval de 7 de febrero de 1974, y contra el denegatorio del recurso de alzada de 20 de noviembre del mismo año, dictado por el Almirante Jefe del Departamento de personal, debemos declarar y declaramos tales acuerdos conformes con el ordenamiento jurídico; sin hacer especial imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

17634

ORDEN número 111/10066/80, de 23 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictado con fecha 29 de noviembre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Francisca Capella Serra y Francisca Crespi Capella.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como demandante, doña Francisca Capella Serra y Francisca Crespi Capella, quien postula por sí misma, y de otra como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 5 de julio de 1978, de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, se ha dictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada con fecha, 5 de julio de 1978, en pleito 160/77 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, confirmamos ésta en todas sus partes sin expresa imposición de costas.»

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y la sentencia que se revisa es del tenor siguiente:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Francisca Capella Serra y doña Francisca Crespi Capella, contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Baleares, de 25 de octubre de 1977 y contra la presente desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones, por no ser ajustadas a derecho; y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos, que la Administración deberá abonar a los recurrentes la cantidad de un millón novecientos cuarenta y nueve mil trescientas cuarenta y dos pesetas con veinte céntimos (1.949.342,20), salvo error aritmético, además de los intereses legales correspondientes en concepto de justiprecio: sin costas.»

En su virtud, este Ministerio, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento u efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones.

17635

ORDEN número 111/10067/80, de 23 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictado con fecha 3 de octubre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Peregrina Millán-Astray Gasset.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como demandante, doña Peregrina Millán-Astray Gasset, quien postula por sí mismo, y de otra como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar de 31 de enero de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 3 de octubre de 1979 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimando el recurso de doña Peregrina Millán-Astray y Gasset, contra resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar de 31 de enero de 1978, que le denegó el derecho de orfandad reclamado por la interesada; sin hacer imposición de costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

MINISTERIO DE HACIENDA

17636

ORDEN de 30 de mayo de 1980 por la que se actualiza la cuantía de las retribuciones mínimas de los Recaudadores de Tributos del Estado.

Ilmo. Sr.: Por los Recaudadores de Tributos del Estado se ha solicitado que, siguiendo los mismos principios que presiden las revisiones de sueldos y salarios, y por las mismas razones, se modifiquen en la cuantía que proceda las asignaciones mínimas que les señala el artículo 73.1 del Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria, en su redacción actual.

Hallándose atribuida la regulación de tal materia a este Ministerio, por el artículo 73.2 del Estatuto Orgánico citado, según la redacción incorporada por el Real Decreto 2996/1978, de 7 de diciembre,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Que con efectos para el presente año, las asignaciones mínimas que para los Recaudadores de Hacienda y de Zona establece el artículo 73.1 del vigente Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria, determinadas en la Orden de 10 de julio de 1979, se incrementen en el 12,5 por 100, sustituyendo la escala vigente por la siguiente, una vez redondeadas las cuantías:

En zonas de categoría especial, 1.598.000 pesetas.
 En zonas de categoría primera, 1.370.000 pesetas.
 En zonas de categoría segunda, 1.197.000 pesetas.
 En zonas de categoría tercera, 1.022.000 pesetas.
 En zonas de categoría cuarta, 1.011.000 pesetas.

Lo que participo a V. I. para conocimiento y efectos, debiendo publicarse esta Orden, para general conocimiento, en el «Boletín Oficial del Estado».

Dios guarde a V. I. muchos años.
 Madrid, 30 de mayo de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro.

17637 *ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se modifica el artículo 6.º del Reglamento de Seguridad y Vigilancia en el interior de la zona franca de Cádiz, aprobado por Orden de 31 de diciembre de 1958.*

Ilmo. Sr.: El Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha elevado acuerdo del Comité Ejecutivo de dicho Consorcio en el que se contempla la conveniencia de modificar el artículo 6.º del Reglamento de Seguridad y Vigilancia en el interior de la Zona Franca, que fue aprobado por Orden ministerial de 31 de diciembre de 1958 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de 1959).

No apreciándose razones que se opongan a dicha modificación y según lo previsto en el artículo 66 del Reglamento de Puertos, Zonas y Depósitos Francos de 22 de julio de 1930, sobre aprobación por este Departamento,

Este Ministerio dispone:

El texto del artículo 6.º del Reglamento de Seguridad y Vigilancia en el interior de la zona franca de Cádiz, aprobado por Orden de 31 de diciembre de 1958, queda sustituido por el siguiente:

«Artículo 6.º Para ser nombrado Guarda-Jurado del Servicio de Seguridad y Vigilancia interior de la zona será requisito necesario reunir las siguientes condiciones:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener aptitud física para el cargo.
- 3.º No haber sufrido condena ni expulsión de otros Cuerpos del Estado, provincia o municipio.
- 4.º Haber observado buena conducta.
- 5.º Ser mayor de veintiún años y menor de cuarenta, excepto para las personas procedentes de las Fuerzas Armadas o Guardia Civil, que podrán ser mayores de cuarenta años.
- 6.º Haber cumplido los deberes del servicio militar activo, sin declaración de inutilidad o invalidez.

Todas estas condiciones se acreditarán con los correspondientes certificados.»

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
 Madrid, 10 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

17638 *ORDEN de 23 de junio de 1980 por la que se dispone la ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en 22 de febrero de 1980 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-administrativo número 821 de 1978, interpuesto por «Inmobiliaria del Sur, S. A.».*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 22 de febrero de 1980, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelsísima Audiencia Territorial de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo número 821 de 1978, interpuesto por «Inmobiliaria del Sur, S. A.» de Sevilla, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de octubre de 1978, en relación con la Contribución Territorial Urbana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos de desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número ochocientos veintinueve mil novecientos setenta y ocho, interpuesto por el Procurador don Manuel Pérez Perera, en nombre y representación de «Inmobiliaria del Sur, S. A.», contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central, de cinco de octubre de mil novecientos setenta y ocho, el que debemos confirmar y confirmamos por ser conforme con el ordenamiento jurídico; sin costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 23 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos

17639 *ORDEN de 23 de junio de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Granada dictada en 15 de noviembre de 1979, en recurso número 240/1978, interpuesto por la Compañía mercantil «Pastalfa, Sociedad Anónima», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 13 de abril de 1978.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 15 de noviembre de 1979 por la Audiencia Territorial de Granada en recurso número 240/1978, interpuesto por la Compañía mercantil «Pastalfa, S. A.», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 13 de abril de 1978, en relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto en estos autos por el Procurador don Rafael García-Valdecasas Ruiz, en nombre de la Compañía mercantil «Pastalfa, S. A.», contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de trece de abril de mil novecientos setenta y ocho, por la que se desestima el recurso de alzada promovido contra otra del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Granada de treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y seis, cuyos actos se encuentran ajustados a derecho. Sin expresa condena en costas.»

Asimismo se certifica que por el Tribunal Supremo, en auto de fecha 21 de abril de 1980, se declaró desierta la apelación formulada en su día ante el mismo contra la referida sentencia, y en su virtud, por resolución de esa fecha, declarada firme en derecho la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 23 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

17640 *ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se amplía el plazo de suspensión temporal del canon en favor de la renta de petróleo sobre las importaciones de gas natural.*

Ilmo. Sr.: Por Orden de este Ministerio de 28 de diciembre de 1979 se dispuso la suspensión temporal de la exacción del canon en favor de la renta de petróleo sobre el gas natural, establecido por Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1969, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 1980.

La permanencia de las razones por las que se estimó conveniente aquella suspensión, aconsejan ampliar el tiempo de su aplicación.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa Delegación del Gobierno, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se proroga hasta el 31 de diciembre de 1980 la suspensión temporal de la exacción del canon en favor de la renta de petróleo sobre las importaciones de gas natural, establecida en el artículo 1.º de la Orden de este Ministerio de 28 de diciembre de 1979, continuando en vigor lo dispuesto en su artículo 2.º.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 3 de julio de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.